



Vicenç Josep Llinares García
C. Consell de Cent 306 3º 1ª
Barcelona 08007 Barcelona

Juzgado de lo Social número 2 de Granollers
Procedimiento 302/2013
Tutela de derechos fundamentales

SENTENCIA NUM. 59/2014

En Granollers, a veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Dª María Delgado García, Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Granollers y su partido judicial, ha visto los autos de juicio 302/2013, sobre tutela de derechos fundamentales, promovidos por Confederación General del Trabajo (representante: D. David Montraveta Aranda), asistida por el letrado D. Vicenç Josep Llinares García contra Gráficas de Prensa Diaria, S.A., Ediciones Primera Plana S.A.U., Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. y Grupo Zeta, S.A., asistidos por la letrada Dª Cristina Samaranch Lacambra y el Ministerio Fiscal.

HECHOS

PRIMERO.- El día 28 de marzo de 2013, el letrado demandante, en el nombre y representación que acreditó, presentó ante el Decanato de los Juzgados de Granollers demanda en la cual, tras alegar, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, terminó suplicando al Juzgado que se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se declare la existencia de un comportamiento por parte de la demandada que vulnera el derecho de huelga de los trabajadores que ejercieron su derecho a la huelga convocada así como del sindicato convocante y el derecho a la libertad sindical y la nulidad radical de la referida



conducta, se condene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a reparar las consecuencias derivadas del acto conforme al art 183 de la Ley de la Jurisdicción Social, abonando una indemnización de 6.000 euros al sindicato actor.

SEGUNDO.- Una vez admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 5 de junio de 2013, se procedió a citar a las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 19 de diciembre de 2013.

TERCERO.- Al acto del juicio, comparecieron ambas partes, ratificándose la demandante en lo contenido en el escrito de demanda mientras que la demandada se opuso al mismo y terminó suplicando al Juzgado que se desestime la demanda.

En la vista, las partes manifestaron lo que a su derecho convino y que consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos. Una vez admitidas las pruebas propuestas por las partes que se entendieron pertinentes y útiles, se procedió a la práctica de las mismas.

Por último, las partes formularon oralmente sus conclusiones, tras las cuales se procedió a declarar concluso el acto del juicio y los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En virtud del artículo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, "Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de



conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.”

QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El 25 de febrero de 2013 el Comité de Empresa de Gráficas de Prensa Diaria, S.A. comunicó al Departament d'Ocupació i Empresa la convocatoria de huelga durante los siguientes días:

“La huelga tendrá una duración diaria de 24 horas, se iniciará a las 6:00 horas y finalizará a las 6 horas del día posterior, afectará a todo el personal de la empresa y se realizará según el horario que se adjunta en documento anexo y durante los siguientes días:

- Días 6, 8 y 9 de marzo.
- Días 13, 14, 15 y 16 de marzo.
- Días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo.
- Días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo.”

Según la citada comunicación, “el objetivo de la huelga es que la dirección de la empresa mencionada se avenga a:

a) Reconocer los acuerdos de convenio firmados en marzo de 2012 sobre reducción salarial y mantenimiento de la plantilla.

b) Que se presenten los resultados económicos de GPD como parte del conjunto de empresas del Intercentros El Periódico de la misma manera que se hizo para negociar el convenio y alcanzar los acuerdos de marzo de 2012.”

El 5 de marzo de 2013 las partes llegaron al siguiente acuerdo ante el mediador de la Secció de Relacions Col·lectives i Normes Laborals:

“Primer.- La presentació de l'empresa es compromet a no presentar un expedient de regulació d'ocupació fins el dia 12 de març de 2013.



Segon.- El comitè de vaga desconvoca els dies de vaga 6, 8 i 9 de març de 2013.

Tercer.- El comitè d'empresa manifesta que deixa sense efecte la decisió comunicada en el correu enviat l'1 de març de 2013 referent a la suspensió de l'acord punt E del conveni signat el març de 2012.

Quart.- Amdues parts es comprometen a continuar les negociacions fins l'11 de març de 2013.”

Posteriormente, se desconvocaron las jornadas de huelga correspondientes a los días 19, 25, 26, 28 y 29 de marzo de 2013.

El 25 de marzo de 2013 el Comité de Empresa de Gráficas de Prensa Diaria, S.A. comunicó al Departament d'Ocupació i Empresa la convocatoria de huelga durante los siguientes días:

“La huelga tendrá una duración diaria de 24 horas, se iniciará a las 6:00 horas y finalizará a las 6 horas del día posterior, afectará a todo el personal de la empresa y se realizará según el horario que se adjunta en documento anexo y durante los siguientes días:

-Días 2, 4 y 6 de abril.

La huelga se iniciará a las 06:00h del día 2 de abril y finalizará a las 06:00 del 7 de abril.”

El 4 de abril de 2013 el Comité de Empresa de Gráficas de Prensa Diaria, S.A. comunicó al Departament d'Ocupació i Empresa la convocatoria de huelga durante los siguientes días:

“La huelga tendrá una duración diaria de 24 horas, se iniciará a las 6:00 horas y finalizará a las 6 horas del día posterior, afectará a todo el personal de la empresa y se realizará según el horario que se adjunta en documento anexo y durante los siguientes días:

-Días 10, 11, 12 y 13 de abril.

La huelga se iniciará a las 06:00h del día 10 de abril y finalizará a las 06:00 del 14 de abril.” (Documentos 1 a 7 parte actora; documentos 1 a 7 Gráficas de Prensa Diaria, S.A.)



Durante el período comprendido entre el 12 y el 19 de abril de 2013 la empresa concedió a los trabajadores un permiso retribuido. (Hecho no controvertido)

El seguimiento de la huelga fue de toda la plantilla de la empresa. (Hecho no controvertido)

SEGUNDO.- El 16 de abril de 2013 Gráficas de Prensa Diaria, S.A. envió la siguiente comunicación al Comité de Empresa:

“Como Uds. saben, en fecha 12 de marzo se presentó ante el Departamento de Empresa y Ocupación solicitud de autorización de Expediente de Regulación de empleo para la extinción de contratos de trabajo de carácter colectivo de la totalidad de la plantilla junto con la documentación legalmente requerida a tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 a 5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, procediéndose a la apertura del correspondiente período de consultas.

Que no habiéndose podido alcanzar un acuerdo en el marco del período de consultas, al amparo de lo preceptuado en el artículo 12 del RD 1483/2012, procedemos formalmente a comunicarles la decisión empresarial de proceder a la ejecución de la medida propuesta. En concreto, se anexa a la presente comunicación la lista de afectados con indicación de la fecha de extinción contractual, abonándose el importe sustitutivo del preaviso en aquellos supuestos en los que la ejecución de la medida resulta inmediata conjuntamente con la liquidación de haberes y partes proporcionales devengados.

La extinción de los contratos dará derecho al percibo de la indemnización legalmente establecida.

Recordarles, asimismo, que tienen a su disposición el plan de recolocación externa ofertado, al amparo de lo indicado en el artículo 12.2 del RD 1483/2012, del que se vuelve a entregar copia, con objeto de que los empleados puedan hacer uso del mismo.” (Documento 8 parte actora)

A pesar de tal comunicación, con posterioridad se llegó a un acuerdo y se evitó el cierre del centro. (Hechos no controvertidos)



TERCERO.- El 15 de marzo de 2013 D. José Manuel Bernal Aparicio, en calidad de presidente del Comité de Empresa de Gráficas de Prensa Diaria, S.A. presentó denuncia contra la citada empresa ante la Inspección de Trabajo y solicitó:

“a) Que porti a terme l'oportuna investigació per sancionar una decisió empresarial que vulnera l'exercisi del dret de vaga de la plantilla de GPD.

b) Que prengui de forma urgent les mesures cautelars necessàries per evitar que l'empresa torni a substituir il·legalment els mitjans i els treballadors propis per altres externs en els inminents dies de vaga convocats pel comitè.”

Según consta en el documento de 7 de mayo de 2013, el mismo día 15 de marzo de 2013 la inspección de trabajo acudió a las instalaciones de Gráficas de Prensa Diaria, S.A. y el centro de trabajo se encontraba cerrado.

El 29 de abril de 2013 el Sr. Bernal Aparicio presentó escrito de desistimiento de denuncia contra la empresa por lo que la inspectora de trabajo propuso el archivo del expediente. (Documentos 9 a 14 parte demandante)

CUARTO.- Grupo Zeta, S.A. se constituyó el 5 de junio de 1987. Su objeto social consiste en la realización del negocio editorial con carácter general y en especial la impresión, edición, publicación y difusión de revistas, publicaciones periódicas y libros, que lleva a cabo fundamentalmente por medio de sus empresas filiales; la intervención en la gestión administrativa, financiera y técnica en todo tipo de empresas; auditoría de empresas y realización de estudios financieros, contables, comerciales y técnicos.

Ediciones Deportivas Catalanas, S.A., Ediciones Primera Plana, S.A.U. y Gráficas de Prensa Diaria, S.A.U. pertenecen a Grupo Zeta, S.A. y están participadas al 10% por éste. (Documento 1 Grupo Zeta, S.A.)

QUINTO.- Gráficas de Prensa Diaria, S.A. se constituyó el 3 de febrero de 1994. Su objeto social principal es la impresión de productos de prensa. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado por Grupo Zeta, S.A..

Según la memoria aportada a los autos de fecha marzo de 2013, en



Gráficas de Prensa Diaria, S.A. “se imprimen los siguientes productos de Grupo Zeta: El Periódico de Catalunya (las dos ediciones, catalán y castellano), el suplemento Más Domingo (dos idiomas), Teletodo (en dos idiomas), Time Out, el diario deportivo Sport, el diario deportivo La Grada y además se encarta semanalmente la revista Yo Dona.

Los productos externos más importantes en cartera, a día de hoy, son: La Razón (con contrato vinculado hasta 2016), ABC (con vencimiento de contrato en mayo de 2013), Periódico de Andorra (con contrato hasta el 2024) y 43 cabeceras más correspondientes a los productos terceros de menor tirada y periodicidad.” (Documento 11 Gráficas de Prensa Diaria, S.A.)

SEXTO.- El 12 de marzo de 2013 D. Jordi Casanovas, director gerente de Gráficas de Prensa Diaria envió a D. Antoni Pujol, director gerente de Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. un correo electrónico con el siguiente contenido:

“Amb el present correu et faig saber que l'Assemblea de treballadors de Gráficas de Prensa Diaria i el Comitè d'Empresa al front, han decidit dur a terme un calendari de vagues com acció davant de l'ERO per Extinció que ha presentat la direcció de l'empresa.

Davant d'aquest fet i amb la impossibilitat de poder produir el vostre producte des de les instal·lacions de GPD, us faig saber amb antelació que haureu de recórrer a altres centres d'impressió del mercat per imprimir la vostra capçalera de manera temporal fins que les vagues programades o les negociacions entre les dues part permetin emprendre les tasques ordinàries de GPD [...]” (Documento 1 Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.)

Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. encargó a Indugraf Offset, S.A. la impresión de las ediciones del diario “Sport” de los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 y 31 de marzo, 3, 5, 7 y 11 de abril de 2012 y también las correspondientes al período comprendido entre los días 12 y 19 de abril de 2013 (Documentos 2 a 26 Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.)

SEPTIMO.- Ediciones Primera Plana, S.A.U. encargó la impresión de las ediciones de “El Periódico” correspondientes a las jornadas de huelga a Bidasoa Press, S.L., Bermont Catalonia, S.A., Recoprint Sagunto, S.L., Rotimpres Impressions Rotatives Offset, S.A., Artes Gráficas del Mediterráneo, Impresa



Norte, S.L.U, Lerigraf, S.L.U., Imprintsa (Documentos 1 a 31 Ediciones Primera Plana, S.A.U)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta según las reglas de la sana crítica de toda la prueba practicada en el proceso, en este caso prueba documental, interrogatorio de parte y declaraciones testificales de D. Raúl Bellette Donay, D. Jordi Antoni Casanovas, D. Joan Sola Herms, y D. Antoni Pujol Vallcorba.

SEGUNDO.- Con carácter previo, debe resolverse sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por Grupo Zeta, S.A., Ediciones Primera Plana, S.A.U. y Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.

Los demandados afirman que estas mercantiles son ajenas a la cuestión y que han sido demandadas únicamente por formar parte del grupo empresarial.

Sin embargo, tal excepción debe ser desestimada ya que no solo el empleador puede vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas de los trabajadores, sino también un tercero por lo que corresponde entrar a resolver el fondo del asunto para valorar las actitudes y determinar las posibles responsabilidades de cada uno de los demandados.

TERCERO.- La cuestión principal del pleito reside en determinar si se produjo vulneración del derecho de huelga al proceder a la contratación de las empresas reseñadas en los hechos probados de la presente resolución, siempre teniendo en cuenta la pertenencia de todas las demandadas a un mismo grupo empresarial.

Resulta necesario reproducir lo contenido en los fundamentos de derecho cuarto, quinto y sexto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de junio de 2008 en un supuesto que goza de gran similitud, casi identidad, con el presente ya que incluso se trata de mercantiles pertenecientes al mismo grupo.



"QUART.- En l'apartat b) del mateix motiu, el demandant qüestiona l'argument de la sentència de que no hi ha hagut vulneració del dret de vaga perquè cadascuna de les empreses és independent i al·lega, en síntesi, que la denuncia de protecció del dret de vaga es realitza contra dues empreses que es trobaven en vaga simultàniament, concretament de La Vanguardia Ediciones i de CRE-a impresiones Catalunya, S.A., pels mateixos motius i amb idèntics objectius i que el Grup Godó, és la propietària del 100% d'aquelles. En el fet provat es detalla com un any abans, els treballadors s'havien oposat a que part de la plantilla de La Vanguardia passés a CRE-A i que aquella empresa va utilitzar mitjans il·legals (rotatives externes) per evitar els efectes de la vaga, tal com va declarat el Jutjat Social nº 14 i va ratificar aquesta Sala en la sentència de data 28.3.2007.

En segon lloc que no obstant, el projecte de l'empresa va continuar i en el mes de maig de 2.006, el Comitè d'empresa va convocar una jornada de vaga pel dia 20 de maig de 2005, la qual va ser desconvocada, tal com s'assenyala en el fet provat sisè, perquè pel matí el Consell del Grup Godó de comunicació va acordar comunicar al Comitè de Vaga que es desistia del projecte, per la qual cosa era evident que s'havia de desconvocar la vaga, perquè aquesta ja no tenia objecte. Això no obstant, tal com es detalla en el fet setè de la sentència, el dia 11.7.2006, el Director General de LVE comunica al Comitè d'empresa de La Vanguardia que el Grup Godó havia decidit transmetre a CRE-A l'activitat d'impressió, els béns corresponents a aquesta i els treballadors, per la qual cosa queda en evidència que existia una estratègia conjunta del Grup encaminada a seguir endavant amb el projecte de subrogació, però concentrant el període negociador en vacances.

I, per últim, que a conseqüència d'aquest fet ambdues empreses van presentar el preavis de vaga pel dia 7 de setembre, és a dir, després de les vacances d'estiu, quan ja la gran majoria de treballadors s'havia reincorporat al treball. Per tant, el dia de la subrogació, l'1 de setembre de 2.006, quan es produeix l'escissió efectiva de CRE-A Impresions de Catalunya, S.A. està vigent el preavis de vaga, que afecta a La Vanguardia, que fou presentat en el mes de juliol, a la qual es sumen els "nous" treballadors de CRE-A, que eren els antics treballadors de la Vanguardia, empresa de la qual havien estat separats mitjançant la subrogació.

Aquestes al·legacions han de tenir favorable acollida. L' article 28.2 de la



la nostra Constitució reconeix el dret de vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos, només limitada per l'establiment de les garanties precises per a assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat. Com es ben sabut aquest dret es recull a la Constitució com un dret fonamental, és a dir, que té la màxima protecció i, a més, s'ha de regular per a llei orgànica. Atès que actualment l'esmentat article no s'ha desenvolupar legalment, resta en vigor el RDLlei 17/19774, de 4 de març, de Relacions de Treball, que regula aquest dret fonamental.

Tal com va posar de relleu la sentència d'aquesta Sala de data 28.3.2007, recaiguda, com s'ha dit abans, en el litigi interposat pels treballadors en la vaga anterior que va tenir lloc el dia 5.12.2006, en la interpretació d'aquesta normativa, "la doctrina científica ha destacado que junto a los referidos efectos clásicos de la huelga sobre las relaciones individuales de trabajo, resulta significativo reparar en los efectos que el ejercicio de dicho derecho tiene sobre las facultades y poderes del empresario, señalándose que normalmente estos límites se manifiestan en restricciones a las facultades de contratación de trabajadores, y, más genéricamente, en limitaciones al poder de dirección y de control, y ello resulta del juego combinado de la situación transitoria de excepción de la normalidad productiva que significa la huelga, y del respeto a la eficacia de la huelga como medida de presión que no puede ser inhibida por la acción empresarial

El primer aspecto se manifiesta en la prohibición de sustituir a los trabajadores en huelga por otros trabajadores contratados por el empresario. Esta prohibición del "esquirolaje" aparece recogida en el artículo 6.5 del DLRT respecto de la contratación directa por el empresario de estos trabajadores sustitutos de los huelguistas, y fue reiterada por la Ley 14/1994 sobre Empresas de Trabajo Temporal, prohibiendo la celebración de contratos de puesta a disposición con una ETT para la sustitución de trabajadores en huelga de la empresa usuaria (artículo 8 de la LETT), lo que fue conceptuado como infracción muy grave por los artículos 96 del ETy 20 de la LETT (que fueron sustituidos a partir de 1-1-2001 por el Texto Refundido de la LISOS). Seguramente esta indicación normativa, como ha indicado la doctrina científica, impediría que la empresa en huelga subcontractase con otra empresa su actividad principal durante el tiempo de duración de la huelga, aunque alguna decisión del Tribunal Supremo ha venido a amparar la utilización de servicios por empresas concurrentes con la que se halla en huelga, sobre la base de la



libertad de contratación y de concurrencia de mercado, sin que a este tipo de conductas se les pueda aplicar de forma analógica la prohibición de sustitución de trabajadores huelguistas que tan enérgicamente impone la ley (STS de 27 de septiembre de 1999, relativa a Televisión de Cataluña S.A.).

El segundo aspecto tiene su origen en una doctrina jurisprudencial, posteriormente sistematizada con carácter general por la STC 123/1992 de 28 de septiembre, que establece que durante la situación de huelga, los poderes de dirección del empleador se encuentran paralizados ("anestesiados" dirá el Tribunal Constitucional de forma gráfica), puesto que se trata de una situación de excepcionalidad en la normalidad productiva, de forma que "la preeminencia del derecho de huelga" produce durante su ejercicio el efecto de reducir derechos del empresario, como su potestad directiva, "que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial". Ello implica que el empresario no puede utilizar las facultades de movilidad funcional de los trabajadores de la propia plantilla que no se sumen a la medida de presión, ni tampoco las que le facultan a la movilidad geográfica con el mismo motivo, ni, en fin, cualquier acto de disposición de personal del que derive una restricción u obstáculo a la eficacia del derecho de huelga. Sin embargo esta línea interpretativa tiene como referencia los poderes del empleador sobre la mano de obra, y sus facultades de organización sobre las personas y no parece que enerve la posibilidad del empresario de utilizar los medios técnicos del proceso de producción de bienes y servicios para vaciar de contenido el derecho de huelga, como sucede cuando éste se encuentra plenamente automatizado en la interpretación de la STS de 28 de junio de 2000, que revaloriza así la facultad organizativa empresarial frente a la lesión que ésta induce al derecho fundamental"

CINQUÈ.- Doncs bé, aplicant els anteriors criteris al present supòsit cal tenir en compte que en el present litigi s'han acreditat una sèrie de fets que ens porten a dissentir dels raonaments de la sentència impugnada. En efecte, s'ha acreditat que:

1) L'empresa La Vanguardia, amb motiu d'una vaga anterior convocada pels seus treballadors els dies 30 de novembre i 2 de desembre de 2005, pel mateix motiu que la que aquí s'està examinant, és a dir, la decisió de l'empresa de descentralitzar l'activitat d'impressió del diari (F.T. quart), ja va substituir els treballadors en vaga mitjançant la maniobra d'encarregar a empreses externes,



que no eren col.laboradores habituals, el treball d'impressió dels diaris, per la qual cosa la sentència del Jutjat Social nº 14 de Barcelona, va declarar que hi havia hagut violació del dret de Vaga. L'esmentada sentència fou confirmada per la d'aquesta Sala de data 28.3.2007.

2) Posteriorment, el Comitè d'empresa de La Vanguardia va convocar una nova vaga pel mateix motiu pel dia 20.5.2006, vaga que fou desconvocada perquè es va comunicar al Comitè de Vaga l'acord al qual havia arribat el Consell d'Administració del Grup Godó, de desistir de la descentralització citada.

3) Això no obstant, el dia 11.7.2006 el Director general de LVE va comunicar al Comitè d'empresa que el Grup Godó havia decidit transmetre a CRE-A l'activitat d'impressió, els béns afectats a aquesta i els treballadors, mitjançant la figura de la subrogació i que havien iniciat els tràmits per acordar l'escissió empresarial de l'activitat d'impressió, és a dir, es va deixar sense efecte l'acord anterior, que era, precisament, el que havia fet desistir de la vaga convocada pel mes de maig. A partir del dia 1.9.2006 l'activitat d'impressió es va realitzar ja per CRE-A, empresa que es va subrogar en aquella activitat i que per fer-la utilitza la nau industrial que LV posseeix al carrer Llull del Poble Nou, mitjançant un contracte d'arrendament.

4) Per aquest motiu els treballadors de La Vanguardia van convocar en el mes de juliol, una nova vaga pels dies 7 a 11, 14, 21 i 28 de setembre de 2.009, és a dir, per després de les vacances d'estiu i a aquesta vaga es van adherir els treballadors subrogats a CRE-A, una vegada van ser traspassats a aquesta empresa (que eren els antics treballadors de La Vanguardia, que es dedicaven a la impressió del diari).

5) Durant els dies de vaga l'empresa La Vanguardia va encarregar les tasques d'impressió de tots els exemplars del diari a "Integral Press, S.A. amb seu a Illescas i "Europrinter", amb seu a Bèlgica. Les citades empreses van complir aquest encàrrec encomanant aquesta impressió a una sèrie d'empreses, que són, precisament, les mateixes empreses a les quals es va encomanar la impressió dels diaris en la vaga del mes de desembre de 2.005 i que -com consta en el fet provat divuitè, després d'haver estat modificat- s'ha acreditat que no eren empreses col.laboradores de La Vanguardia, perquè pràcticament només van imprimir exemplars del diari en els dies de vaga, tant de la primera



del 2.12.2005, com durant els dies de la segona, en el mes de setembre de 2.006, que estem examinant en el present plet.

Així doncs, davant d'aquests fets, no es pot més que arribar a la conclusió de que en la vaga del mes de setembre de 2.006 fou provocada per la decisió de l'empresa de traspasar tot el treball d'impressió a una altra empresa, que en el mes de maig, l'empresa va aconseguir fer desconvocar una vaga ja anunciada, mitjançant la comunicació als treballadors de que s'havia revocat aquesta decisió, però en realitat aquesta decisió va ser modificada de nou molt poc temps després, perquè justament abans de les vacances d'agost l'empresa va comunicar de nou als treballadors que s'havia pres la decisió ferma de descentralitzar la impressió del diari, motiu pel qual es va tornar a convocar vaga pels dies citats del mes de setembre i durant aquesta es va utilitzar per l'empresa el mateix mètode que es va utilitzar en l'anterior vaga per tal d'evitar els efectes d'aquesta, és a dir, impedir que el diari La Vanguardia deixés de publicar-se. L'única diferència amb els fets del mes de desembre de 2.005 va ser que en aquell moment tots els treballadors pertanyien a una mateixa empresa, La Vanguardia i en el mes de setembre de 2.006 alguns treballadors ja havien estat traspassats a CRE-A.

I davant d'aquests fets no es pot pas compartir el raonament de la sentència d'instància de que no va existir vulneració del dret de vaga perquè qui va acordar que la impressió la realitzessin les dues empreses de fora de Catalunya va ser La Vanguardia, que ja no se n'encarregava de la impressió del diari, perquè en primer lloc, quan es va preavisar de la vaga, per part del Comitè d'empresa de LV, la totalitat dels treballadors pertanyin encara a aquesta empresa i, en segon lloc, perquè com es comprova perfectament llegint el relat fàctic de la sentència, en realitat totes les ordres i tota la política d'ambdues empreses ve dirigida pel Grup Godó, que és el propietari del 100% de les accions d'aquelles.

SISE.- Per últim, en el apartat c) del mateix motiu els recurrents s'oposen a l'afirmació del jutge d'instància de que només en el cas de que les tres empreses demandades formessin un grup d'empreses es podria plantejar la possibilitat d'una conducta impeditiva del dret de vaga i afirmen que aquest argument no es pot admetre perquè seria tant com deixar sense sanció tots aquells supòsits en que diverses empreses, tant si formen un grup a efectes laborals com no, es posin d'acord per afavorir o recolzar la vulneració dels drets



dels treballadors.

14/18

Aquesta al·legació s'examinarà juntament amb l'únic motiu del recurs interposat per la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), el qual correctament emparat en l'apartat c) de l'article 191 de la LPL, denuncia que la sentència ha infringit, per interpretació errònia, l'article 1 de l'Estatut dels Treballadors i al·lega, en síntesi, que les empreses codemandades sí que formen un grup empresarial a efectes laborals, atès que hi ha una unitat de direcció, que exerceix el Grup Godó, que és qui pren les decisions i que és la propietària de les altres dues empreses.

En principi, i tal com correctament indiquen les demandades en els seus recursos d'impugnació del recurs, la Sala no entén que en el recurs presentat per la CGT s'afirmi que s'ha infringit l'article 1 de l'Estatut dels Treballadors, en primer lloc, perquè aquest article consta de 5 apartats, per la qual cosa s'hauria d'haver indicat quin d'ells ha estat infringit per la sentència, i en segon lloc, i més important, perquè aquest article especifica quines son les relacions de treball regulades per la llei, qui s'ha d'entendre que és empresari, quan s'aplicarà la legislació espanyola i també el concepte de centre de treball, però no fa cap referència als grups d'empresa. Això no obstant s'entrarà al seu examen, tal com s'ha dit abans, juntament amb el presentat pels treballadors, atès que en el fons denuncien el mateix.

Doncs bé, l'argument dels treballadors ha de ser acceptat per la Sala, perquè certament no es pot admetre cap tipus de concert entre empreses, que formin un grup laboral, tal com la definit la jurisprudència, és a dir, en el qual hi hagi confusió de plantilles, de caixa, de treballadors, etc., o que siguin un grup normés mercantil o, fis hi tot, que no en formin cap, que vagi dirigit a eliminar o restringir els drets dels treballadors, en relació amb un dret fonamental com és el de vaga. En el present supòsit és cert que no existeix un grup d'empreses en el sentit laboral del terme, perquè totes tres empreses han estat legalment creades i ningú no ha al·legat cap tipus de confusió entre elles, però és clar i evident que totes tres formen un grup empresarial mercantil i que en el present cas han actuat totalment de forma conjunta, per tal d'evitar els efectes de la vaga.

El Grup Godó és el que ha dirigit tota l'operació de descentralització d'una part de l'activitat de La Vanguardia per traspassar-la a CRE-A i després, quan els treballadors van anunciar la vaga, és clar que conjuntament van buscar la



manera de deixar a aquesta sense contingut, impedit que tingués les repercussions buscada, és a dir, evitar la sortida del diari i per aconseguir aquest propòsit es va utilitzar un procediment més sofisticat que suplir els treballadors en vaga amb altres treballadors, fet prohibit per la llei, ni tampoc es va suplir la manca d'activitat dels vaguistes utilitzant altres col.laboradors habituals, com va succeir en el supòsit contemplat en les sentències del T.S. de dates 4.7.2000i 15.4.2005o bé utilitzant exclusivament mitjans tècnics, sinó que es va utilitzar tot un mecanisme -ja explicat anteriorment- en el qual formalment no s'estava conculcant el dret de vaga dels treballadors, encara que la seva finalitat era aquesta i, a més, es va aconseguir l'objectiu, perquè els diaris van sortir al carrer com si els treballadors no estiguessin en vaga.

Tal com correctament assenyalen els recurrents aquesta actuació no es pot convalidar perquè igual com l' article 3 del Codi Civil disposa que les normes s'han d'interpretar en últim terme tenint en compte el seu esperit i finalitat, de la mateixa manera, en examinar les relacions jurídiques s'ha d'intentar arribar a esbrinar la finalitat amb la qual actuen, encara que formalment estiguin correctament establertes, per tal d'evitar que a l'emparament d'una norma s'arribi a aconseguir el que una altra prohibeix, supòsit prohibit per l' article 6.4 del Codi Civil. Així doncs, obviant les formalitats de legalitat de què estan investides les empreses demandades s'ha d'arribar a la conclusió de que la seva actuació conjunta va estar destinada a deixar sense efecte les conseqüències de la vaga iniciada pels demandants, amb la qual cosa s'ha de declarar que ha existit vulneració del dret de vaga dels treballadors demandants, en la vaga realitzada per aquests des de les 7am del dia 7 de setembre fins les 7a del dia 10 de setembre, des les 7am del dia 11 de setembre fins les 7am del dia 12 de setembre i des les 7am del dia 15 de setembre fins les 7am del dia 17 de setembre.

D'altra banda, s'ha de refusar el motiu del recurs presentat per la C.G.T. perquè és evident, a judici de la Sala que les tres empreses demandades no formen un grup a efectes laborals, perquè tal com correctament raona el jutge d'instància, no es donen els requisits que la jurisprudència ha assenyalat perquè es pugui parlar d'aquest fenomen, perquè no existeix confusió de plantilles, caixa única, etc., el que no vol dir, com abans s'ha raonat, que no se les hagi de condemnar per haver aconseguit evitar, amb la seva actuació, les conseqüències de la vaga."



Se comparten totalmente los razonamientos expresados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No puede afirmarse que las entidades demandadas formen un grupo de empresas a los efectos laborales dado el incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos o, al menos, la falta de acreditación de la concurrencia de los mismos en el presente procedimiento. Sin embargo, ello no obsta que las demandadas hayan vulnerado el derecho fundamental de huelga de los trabajadores.

Afirmar que Gráficas de Prensa Diaria, S.A. se limitó a comunicar la convocatoria de la huelga y que las demás mercantiles de una forma autónoma e independiente acudieron a terceras empresas para la impresión de los diarios carece de lógica; incluso algunos de los testigos (D. Antoni Pujol y D. Jordi Antoni Casanovas) reconocieron que fue una decisión consensuada.

Tal y como ha afirmado el Tribunal Superior de Justicia, *“obviant les formalitats de legalitat de què estan investides les empreses demandades s'ha d'arribar a la conclusió de que la seva actuació conjunta va estar destinada a deixar sense efecte les conseqüències de la vaga iniciada pels demandants.”*

Por tanto, dejando temporalmente a un lado la apariencia formal de las demandadas, solo puede concluirse que el comportamiento de las mismas fue dirigido a contrarrestar y anular los efectos de la huelga. En consecuencia, se estima vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores.

CUARTO.- En la demanda se interesa el abono de una indemnización en concepto de daños morales causados por la vulneración del derecho fundamental. La parte actora valora los mismos en 6.000 euros.

Teniendo en cuenta que la actuación de las empresas consiguió evitar el efecto buscado con la huelga, es decir, que los periódicos no salieran a la calle y el impacto de tal ausencia, se considera que el comportamiento de los demandados causó un daño moral al demandante.

La parte demandante basa la cuantía indemnizatoria en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo 8.10 de la citada disposición legal tipifica como infracciones muy graves “los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al



tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento.”
Tales infracciones son sancionadas en su grado mínimo con multa de 6.251 a 25.000 euros según el artículo 40 de la expresada ley.

Debe hacerse constar que Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social no es de aplicación obligatoria en tal supuesto, sino que es uno de los criterios orientativos a los que puede acudir para la fijación de la cuantía indemnizatoria y que además el supuesto tipificado en la citada disposición legal no es idéntico al que es objeto del presente procedimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta la dificultad de valorar y cuantificar los daños morales así como las circunstancias del presente supuesto y también las alegaciones de ambas partes, se fija la indemnización en 6.000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación

FALLO

SE ESTIMA la demanda interpuesta por la Confederación General del Trabajo (representante: D. David Montraveta Aranda) contra Gráficas de Prensa Diaria, S.A., Ediciones Primera Plana S.A.U., Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. y Grupo Zeta, S.A., **Y SE DECLARA** que los demandados vulneraron el derecho de huelga del demandante con su actuación que **SE DECLARA nula** por lo que deben abonar a la parte actora la cantidad de **6.000 euros** en concepto de indemnización por los daños morales causados.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debiendo anunciarlo ante este mismo Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el recurrente no ostenta la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, acredite haber consignado el importe íntegro de la



condena en la cuenta corriente de este juzgado abierta en BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO con el nº 1487/0000/60/0302/13 o presente aval solidario de entidad financiera por el mismo importe, debiendo además consignar como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones nº 1487/0000/65/0302/13 abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal nº 2073 de Granollers, Plaça Porxada nº 30, en la oficina de la entidad financiera indicada.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución por la Juez que la dictó, hallándose constituido en audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.